

Universidad Nacional Autónoma de México, dos años después, un conflicto que no termina

Hugo Aboites

El enemigo no está aniquilado.
(Diciembre, 2000)

El nueve de febrero de 1999 el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Francisco Barnés de Castro, pronunció aquel famoso discurso en el que anunciaba su intención de establecer un aumento radical en las colegiaturas de los estudiantes. Hoy, casi dos años después, no ha terminado aún el conflicto y se puede decir, incluso, que cada vez son más profundas sus implicaciones y mayor la fuerza de sus repercusiones en la educación superior mexicana. Dos años después se ha confirmado que en efecto se trata de un movimiento estudiantil sólo superado en intensidad y trascendencia por el de 1968, que fuera reprimido a tiros por las fuerzas gubernamentales en la plaza Tlaltelolco de la capital mexicana.

El conflicto de hace treinta años enfrentó a los estudiantes (sobre todo de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, IPN) a la ausencia de libertades ciudadanas y al autoritarismo y represión del régimen priista y anunció el inicio de la crisis de ese modelo político-económico de país que entonces estaba a punto de cumplir medio siglo.

El movimiento actual, por su parte, ha colocado a los estudiantes universitarios precisamente en medio del camino que han trazado para la universidad mexicana organismos internacionales y grandes empresarios urgidos por integrar y transformar la educación superior como parte estratégica del nuevo orden del libre comercio y la globalización. Y si bien los estudiantes no han sido capaces de detener completamente o alterar de una manera radical el curso previsto, sí representan uno de los primeros anuncios de la crisis del desarrollo fincado en el libre comercio y la globalización. La crítica al proyecto de universidad deriva fácilmente hacia una crítica a un proyecto de país.

Hoy, empresarios y funcionarios gubernamentales se enfrentan a un contexto de resistencia prácticamente inexistente hasta antes de 1994.³ La misma elección de Vicente Fox como presidente de la República y el inicio de un nuevo gobierno de centro-derecha, paradójicamente, al mismo tiempo que significa un deterioro importante en la orientación del gobierno federal, abre una perspectiva diferente y más favorable que la que ofrecía la mera continuación del régimen priista. Evidentemente, no por la simpatía que este nuevo gobierno pueda tener por la agenda del movimiento estudiantil, sino por las fuerzas que ha desatado el fin del corporativismo del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la debilidad de un gobierno que trata de crear en torno suyo una coalición de fuerzas sociales y políticas capaz de sostenerlo.

En el presente texto se describen y analizan primero las condiciones actuales del movimiento; segundo, la forma en que este movimiento está teniendo una repercusión en la política educativa nacional, y, tercero, las perspectivas que se están abriendo a partir de la persistencia del movimiento para la educación superior.

1. La continuación del movimiento

El médico psiquiatra que vino a sustituir al químico Francisco Barnés de Castro a fines de octubre de 1999, Juan Ramón de la Fuente, llegó a la UNAM con dos objetivos: 1) terminar cuanto antes con una huelga que duraba ya seis meses y que estaba teniendo un costo muy alto para la imagen de las autoridades universitarias y del partido gobernante (PRI)⁴, y 2) reprimir y aniquilar políticamente al movimiento estudiantil.

Para lograr el primer objetivo el nuevo rector ofreció una imagen conciliadora y propuso como salida a la huelga la suspensión temporal de algunas de las iniciativas y cambios reglamentarios que eran objeto del pliego petitorio⁵ y su posterior discusión en un Congreso, con lo que retomaba -si bien de manera muy ambigua- una propuesta de los estudiantes.

Para lo segundo, llegó decidido a no conceder ninguno de los seis puntos del pliego petitorio del Consejo General de Huelga (sólo aceptó suspenderlos temporalmente) a fin de discutirlos luego en un espacio donde con más facilidad podría "mayoritarse" a los estudiantes. Ceder de manera definitiva en algunos de los puntos habría significado una clara victoria para los estudiantes y sería algo que sin duda fortalecería al movimiento.

Este doble objetivo ya se había intentado durante los primeros seis meses de huelga cuando todavía era rector Barnés de Castro (el Consejo Universitario se reunió en junio, por ejemplo y decidió volver "voluntarias" las cuotas), pero de una manera tan desorganizada y con desplantes tan autoritarios, que no tuvo los efectos deseados. Con la llegada del nuevo rector, estos objetivos se retomaron, pero ahora con una mayor precisión. Por eso a partir de su llegada, el rector de la Fuente las autoridades universitarias y gubernamentales comenzaron a moverse en un ballet político bien concertado, que incluyó principalmente los pasos siguientes:

1) Espectacular convocatoria del rector a Consejo General de Huelga (CGH) a un diálogo público y directo para resolver el conflicto, pero luego sólo ofrecer la suspensión de las iniciativas; 2) aliento a los medios y voceros de la opinión pública a condenar a los estudiantes por intransigentes, de manera especial en la mesa del diálogo; 3) cuando este primer diálogo finalmente naufragó, reclutamiento del mayor número posible de figuras políticas, académicas, artísticas, científicas, literarias (como Elena Poniatowska, famosa entre los estudiantes por su libro sobre el 68) y, veladamente, del propio gobierno de la C. de México del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la firma de desplegados que deslegitimaran al movimiento y llamaran a los estudiantes rebeldes a la entrega inmediata e incondicional de las instalaciones aceptando la propuesta del rector; 4) con esas personalidades a la cabeza (incluyendo al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la C. de México), convocar luego a toda la comunidad universitaria a un plebiscito para enfrentar directamente al movimiento. Poco más de 160 mil estudiantes y trabajadores académicos y administrativos (y además, antiguos alumnos de la UNAM) votaron a favor de la propuesta del rector y del levantamiento de la huelga; 5) teatral llegada del rector de la Fuente acompañado de los medios de comunicación a las barricadas estudiantiles para entregarles los los resulta-

dos del plebiscito y demandar allí mismo la entrega de los edificios universitarios, y, 6) ante el rechazo de los estudiantes al plebiscito, dar paso a la anunciada una y otra vez implícita y explícitamente como "única salida posible ante la intransigencia de los estudiantes": la intervención directa de las fuerzas gubernamentales en contra de los estudiantes, y, finalmente, 7) para quebrar al movimiento, encarcelar a un segmento importante de activistas (mil de ellos) y establecer procesos penales en su contra.

Decididos como estaban a no ceder en ninguno de los puntos de su pliego petitorio, los estudiantes del Consejo General de Huelga pudieron hacer muy poco por contrarrestar la campaña de progresivo sitio propagandístico, pero fueron capaces de responder y obtener pequeños pero importantes triunfos.

En la primera negociación (conocida por el nombre de su sede, el Palacio de Minería), por ejemplo, lograron que antes de pasar a discutir cada uno de los puntos del pliego estudiantil, se firmara un acuerdo mediante el cual la rectoría se comprometía no sólo a reconocer al Consejo General de Huelga como "el único interlocutor válido" sino también a "resolver el conflicto mediante el diálogo". Este acuerdo jugó un papel clave a la hora de la intervención policíaca, pues para importantes sectores de la sociedad fue una traición de las autoridades universitarias, el poner en prisión a aquellos a quienes poco antes había reconocido como interlocutores.⁶

Si bien este diálogo naufragó antes de discutir siquiera cada uno de los puntos del pliego petitorio estudiantil (en parte debido a la insistencia de los estudiantes en el cumplimiento de cuestiones de carácter secundario) ya aquí los estudiantes pudieron mostrar que tenían tantos o más argumentos que las autoridades y que no temían firmar acuerdos si estos les parecían razonables.⁶

Además, en contra del plebiscito de las autoridades, los estudiantes lograron organizar un referéndum popular (no universitario) con más de 624 mil votos en apoyo a su movimiento e insistieron en que los 160 mil votos obtenidos por rectoría no representaban ni siquiera la mitad de un padrón original de 400 mil estudiantes, egresados y trabajadores universitarios elaborado por las propias autoridades.⁷ Caían así por tierra las expresiones triunfalistas de que "la mayoría de los universitarios rechaza la huelga".

Pero el triunfo más importante, sin embargo, no fue protagonizado sólo por los estudiantes, sino por una verdadera avalancha de solidaridad de hombres y mujeres que desde muchos insospechados rincones y organizaciones de la sociedad salió a la calle en protesta por la ocupación que las fuerzas federales habían hecho de la Universidad y por el encarcelamiento y apertura de procesos criminales (con cargos tan desproporcionados como el de "terrorismo") contra un millar de estudiantes y académicos universitarios.

Esta solidaridad apareció desde las primeras horas de la ocupación de la Universidad como una marcha que recorrió el centro de la ciudad pero tres días más tarde, se materializó en una manifestación más de 250 mil personas al Zócalo de la C. de México. El único antecedente reciente de una reacción semejante, tan generalizada y espontánea, fueron las marchas de principio de 1994 en demanda de un alto al fuego en Chiapas.⁸

La solidaridad vino a cambiar de manera radical el escenario previsto de derrota y aniquilación del movimiento que habían preparado la rectoría de la UNAM y el gobierno federal. Las autoridades no tuvieron en cuenta que la permanente campaña de satanización ciertamente había sido eficaz para movilizar a la opinión pública contra los estudiantes, pero sólo dentro de ciertos marcos. Más y más personas criticaban la duración de la huelga y la falta de flexibilidad de los huelguistas, pero esa opinión no era una autorización o carta blanca para la represión del movimiento.⁹ Y esto era sobre todo cierto entre las clases más populares,¹⁰ que, además de estudiantes, padres de familia, sindicatos de la educación, constituyeron el sector clave y más numeroso de las manifestaciones. Significó además, que demandas como la gratuidad y la emoción de obstáculos al ingreso a la educación postsecundaria sí eran comprendidas y apoyadas hasta cierto punto por contingentes importantes de los sectores populares del país.

La masiva e inmediata muestra de solidaridad con los estudiantes, por otro lado, tuvo el efecto de volver a reforzar al movimiento y de crear nuevas condiciones al interior de la UNAM. Hasta los estudiantes que en un momento dado se habían deslindado del movimiento se le unieron otra vez bajo la demanda de libertad a todos los universitarios presos y la salida inmediata de la Universidad de las fuerzas federales. Las constantes marchas a la prisión donde estaban reclusos los estudiantes y las marchas que dentro de la prisión organizaban los propios universitarios presos, aunado a las constantes denuncias en gran cantidad de foros nacionales e internacionales recompuso la situación de manera favorable al movimiento.

La reacción en contra del gobierno y la rectoría repercutió de inmediato también en círculos como los intelectuales. Personalidades como Elena Poniatowska (que lloró conmovida por las condiciones de insalubridad y hacinamiento que vivían los estudiantes presos) y otros sectores de la comunidad universitaria matizaron o modificaron sus posiciones antes condenatorias al darse cuenta que habían sido parte de una estrategia para justificar la represión. Se abrió así un espacio inesperado los estudiantes y su lucha, al añadirse el punto de libertad para todos los presos políticos universitarios.

La Universidad reabrió sus puertas al cabo de un par

de semanas, pero este nuevo espacio político creado a pulso por la respuesta popular, la constante toma de direcciones de escuelas, manifestaciones, un plantón de padres de familia a las afueras de la Torre de Rectoría, obligaron a las autoridades a convocar de nuevo a un diálogo (abril-mayo 2000, conocido como el del Auditorio Alfonso Caso) para tratar de encauzar y legitimarse una vez más mediante la descalificación de los estudiantes. Este nuevo diálogo, evidentemente, después de la presencia de las fuerzas federales en la Universidad y con un millar de universitarios en la cárcel, fue en términos mucho más duros que el anterior y hasta cierto punto contraproducente para la rectoría universitaria.

Los estudiantes demandaron una y otra que la rectoría se desistiera de las acciones penales iniciadas contra sus compañeros, y entraron a una discusión sumamente informada sobre cada uno de los puntos del pliego petitorio. Pero las autoridades no cedieron un solo milímetro en ninguno de los puntos. Los estudiantes sólo tenían como alternativa, según las autoridades, aceptar la propuesta del rector. En consecuencia, este segundo diálogo también fracasó: hartos, los estudiantes se retiraron de la mesa de diálogo.

En este último diálogo involuntariamente los representantes de la rectoría mostraron las limitaciones fundamentales de su propuesta de Congreso Universitario. En las discusiones no defendieron su tesis de que los puntos del pliego debían ser tratados en el Congreso sino que estos eran inaceptables y, alguno de ellos, hasta inexistente. Así el diálogo sirvió para mostrar las dudosas perspectivas de un Congreso en que las autoridades centraban todo el esfuerzo por resolver definitivamente el conflicto.

Este desarrollo, posterior a la ocupación cuasi militar¹¹ y a la cárcel, muestra que el movimiento estudiantil era capaz de seguir luchando con no poco éxito. Logró una segunda ronda de diálogo; obtuvo la libertad total e incondicional de todos y cada uno de sus presos, forzó al rector a, en los hechos, dejar en suspenso la aplicación de otra de las iniciativas cuestionadas por los estudiantes y consiguió establecer un clima permanente de cuestionamiento a la rectoría. Estas ahora se encuentran en uno de sus puntos más bajos de legitimidad, en un contexto político nacional muy diferente y con muy poco espacio político interno para la organización y definición del Congreso Universitario. Este congreso, es, además, el centro de otra disputa.

2. De la crisis institucional a la crisis nacional de la educación superior

La continuación del movimiento durante todo el año 2000 era algo que ciertamente no estaba dentro de los

planes de la rectoría universitaria y el gobierno federal; y provocó precisamente lo que se quería evitar: que el conflicto universitario se mezclara con las elecciones presidenciales.

Una de las motivaciones del gobierno federal para dar paso a la represión en febrero 2000 era anticipar que habría algunas semanas de protestas pero que, con la opinión pública en contra, el movimiento estudiantil no pesaría ya en el ánimo de los ciudadanos a la hora (julio 2000) de las elecciones para Presidente de la República y Congreso. Porque después de cerca de nueve meses de huelga el ánimo público censuraba a los estudiantes "ultras", pero de manera distinta a las autoridades universitarias y al gobierno federal (es decir, al PRI¹⁴) por su prolongado pasmo en resolver en definitiva y a tiempo conflictos como el de Chiapas y ahora el de la UNAM. ¿También este va a durar años como el de Chiapas?, se preguntaban.

El hecho de que la ocupación y la cárcel sólo reavivaran la confrontación en torno a la Universidad vino a reforzar la percepción de incapacidad de las autoridades y contribuyó a ahuyentar a los votantes de las opciones priistas e incluso perredistas¹⁵ y a inclinarlos por una alternativa que se ofrecía como totalmente nueva y distinta, con un discurso fresco y flexible, aunque su origen y coordenadas políticas eran claramente de centro derecha.¹⁶

Las implicaciones del triunfo de Vicente Fox, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) fueran inmediatas e inesperadas. Una gran mayoría de los funcionarios de las instituciones públicas, como el caso del rector de la Fuente de la UNAM habían dependido gran parte de su vida política-profesional del aparato priista y de la seguridad que ofrecía su permanencia en el poder durante 70 años y ahora súbitamente se quedaron "sin la figura del padre"¹⁷, sin esa presencia reconfortante y poderosa capaz de apoyarlos y sacarlos de cualquier atolladero.¹⁸

Al desamparo de la orfandad siguió, además, el trauma del humillante lanzamiento a la calle; el despojo del lugar del poder que había su residencia durante tantas décadas. El nuevo presidente electo no sólo mostró clara su intención de retomar e ir más allá en la agenda privatizadora que ya había comenzado a implantar la dirigencia de la educación superior pública bajo los auspicios del PRI¹⁹, pero además hizo ver su determinación de que esa dirigencia (rectores de universidades públicas clave, entre ellas la UNAM) no fuera ya la que detentara el monopolio de la conducción de la educación superior pública. También debería estar ahí, directamente y si fuera posible, a la cabeza, el sector empresarial privado de la educación.

Eso precisamente significó el hecho de que el presidente electo colocara al frente de la Coordinación del Área Educativa del Equipo de Transición -y candidato natural

al puesto de Secretario en Educación Pública- al Director General del sistema universitario privado más importante del país,²⁰ creado por el poderoso y conservador Grupo Monterrey, un importante conglomerado industrial del norte del país. Entre los grupos empresariales privados del país que ha tenido la idea más clara del papel que debe jugar la educación y el conocimiento en el proceso de integración a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.²¹

La llegada de los empresarios como nuevos protagonistas directos en la educación generó una crisis dentro de la propia conducción de la educación pública. Una parte de los dirigentes, encabezados por el rector de la UNAM y por el rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) se resistieron a que los echaran fuera. Criticaron, el primero las propuestas educativas del nuevo líder privado de la educación pública (educación virtual masiva, mercantilización de la educación, *vouchers*, y créditos educativos, sobre todo) y, el segundo, el hecho mismo de que fuera un director (y en funciones) de la educación privada quien estuviera preparando el programa educativo público y quien muy probablemente tendría a su cargo la educación pública del país.

La otra parte, encabezada por el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Dr. Julio Rubio Oca, consideró mejor táctica aliarse a los ganadores y así, sin abandonar tampoco su puesto como dirigente de los rectores de universidades e instituciones de educación superior (mayoritariamente pública), pasó a formar parte del Área Educativa del Equipo de Transición con la esperanza implícita de hacer prosperar una detallada agenda que él mismo había impulsado los dos años anteriores y ganar posiciones dentro del nuevo gobierno.²²

Durante los largos meses (julio-noviembre, 2000) que duró la espera respecto de los nuevos funcionarios, los universitarios y la opinión pública vieron con sorpresa como el rector de la UNAM tomaba el liderazgo de la oposición a la llegada de los empresarios de la educación a la educación pública en un discurso que cada vez tenía más tonalidades del discurso de los estudiantes antes calificado de "ultra"²³, pero finalmente se llegó a un acuerdo tácito entre las distintas fuerzas, incluyendo posiblemente también al rector de la UNAM y al poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.²⁴ Se aceptaba el veto, el Director del Sistema Tecnológico de Monterrey no quedaría como Secretario de Educación Pública, pero desde otro puesto (presidente del Consejo Nacional para de Educación para la Vida y el Trabajo) tendría una fuerte influencia en la conducción de la educación.²⁵ Pero además, aunque el nuevo Secretario sería el rector de una institución pública (Universidad Autónoma de Nuevo León, situada en Monterrey), era

políticamente muy cercano con Director del Sistema Tecnológico de Monterrey y con el panismo de esa entidad federativa.²⁶ Por su parte, como era previsible, la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESI) quedaría asignada al secretario de la ANUIES, autor de la detallada agenda de privatización que se convirtió en la carta de los rectores de universidades públicas frente al nuevo gobierno. De esta manera, si bien quedó aparentemente fuera la cabeza empresarial más visible, la agenda de privatización se veía ahora reforzada por un aparato claramente privatizador (y empresarial).

Pero además, la conformación del gabinete federal encerró otra sorpresa para las autoridades de la UNAM. Esta consistió en el nombramiento del Dr. Sarukhán un ex-rector de la UNAM, importante miembro del sector científico conservador de esa institución y activo opositor del Congreso Universitario, como titular de un espacio supra ministerios al que se confía la coordinación, entre otras, de la Secretaría de Educación Pública. Esto, evidentemente, fortalece a la derecha en la UNAM y hace más tensa la perspectiva de los alcances que puede tener un Congreso en la UNAM.²⁷

Otro elemento perturbador para las autoridades de la UNAM es el hecho de que el nuevo rector proviene de una importante universidad estatal y puede hacerse solidario con la callada pugna que las universidades estatales han sostenido con las universidades llamadas federales (UNAM, UAM, IPN) que juntas concentran más del 50 por ciento del presupuesto destinado a educación superior.²⁸ Cualquier disminución en los recursos para la UNAM evidentemente que generaría un clima de mucha inquietud y malestar dentro de la más importante institución en el país.

A pesar de los vetos primero y pactos luego, es evidente que el clima político en la educación superior se encuentra definitivamente alterado. Una conducción con un perfil empresarial y de derecha (y además poco experimentado y poco sensible) y una agenda privatizadora evidentemente que anticipan un panorama conflictivo en la educación superior. Sin el PRI en el gobierno federal y en varios estados de la república, los rectores de universidades públicas no tienen ya ni remotamente la fuerza anterior de apenas el año pasado, y los pactos que pueden hacer dentro de la nueva coalición que gobierna la educación superior no les recuperan el paraíso perdido. Pero por otro lado, la nueva coalición que toma el mando carece de las bases (de los recursos económicos) y de la estructura corporativa que la daba su fuerza a la anterior dirigencia de la educación superior. En el seno de esta nueva conducción, como ya se ha visto, aún las diferencias más pequeñas serán muy volátiles: no son los asuntos en sí mismos, será una y otra vez la conducción lo que entrará en disputa.

Este panorama abre perspectivas muy distintas a las que existían bajo el priísmo. Anticipa la posibilidad de que puedan reorganizarse y fortalecerse sujetos sociales en torno a la educación pública como son los movimientos estudiantiles, sindicales de la educación, populares y sectores de la sociedad. Y, con eso, que puedan discutirse y modificarse la propuesta de universidad pública cuyo paradigma ahora es el Tecnológico de Monterrey.²⁹ Y también pone en tela de duda hasta qué punto la estrategia de creación de un nuevo conocimiento, clave en la propuesta de desarrollo nacional de Fox, tiene viabilidad sin la base de un acuerdo social amplio sobre la educación.³⁰

Pero además, si, como se ha anunciado, el gobierno de Fox decide avanzar en la privatización de otros sectores clave (electricidad, petróleo), la inquietud y movilización que estas iniciativas puedan propiciar crearán también un contexto (como fue patente durante el movimiento en la UNAM) en que se revaloren las demandas de educación gratuita, sin restricciones clasistas, y de conducción democrática de las instituciones de educación superior, como parte de una lucha anti privatizaciones.

Podrá quedar más claro también que la terca oposición de los estudiantes, aunque solitaria y abandonada por los intelectuales y partidos de centro izquierda como el PRD, tiene un sentido que va más allá de la lucha por la gratuidad y en contra del autoritarismo y los obstáculos al acceso y permanencia en la educación superior. Es el primer paso a una oposición a dar los pasos iniciales de una agenda de transformación cuyo punto de referencia era la educación privada, las recomendaciones de organismos internacionales y las presiones de las grandes corporaciones, así como las concepciones mercantiles y de capital humano vigentes en la conducción de la desde principios de los noventa.

La lucha de los estudiantes es, en el fondo reflejado por su pliego petitorio, una lucha por un proyecto social de educación superior pública. Y que entonces tenían razón en su terquedad.

3. Un nuevo escenario

Como se desprende de lo esbozado anteriormente, la crisis institucional (UNAM) y nacional en la educación superior está creando un escenario totalmente distinto en la disputa por la educación pública en México. Aunque son varios los elementos que podrían describirlo, tres parecen ser los más importantes y, las que, de manera incipiente, muestran el tenue paso de una lucha de resistencia a una capaz de comenzar a generar un proyecto propio.

Nuevos sujetos sociales, una nueva variable en los planes de transformación universitaria

La resistencia de ya casi dos años en la UNAM, redimensionada por el cambio de contexto a nivel nacional, ha generado un contexto nuevo en la educación supe-

rior. Por una parte es claro que hay nuevos sujetos sociales en la educación y educación superior capaces de interactuar, así sea por lo pronto desde la sola resistencia, con el proyecto de privatización. Son principalmente movimientos estudiantiles como el CGH, pero también otro sujeto inesperado: los padres y madres de familia que desde el principio de la huelga llevaban a sus hijos comida, libros, cobijas, condones y sobre cuyos hombros recayó gran parte de la lucha, un año más tarde, por liberar a los universitarios presos. Y otros rasgos también nuevos, entre ellos, la ampliación de los sujetos: cuando la PFP ocupó la Ciudad Universitaria (UNAM) los delegados del CGH no tuvieron que interrumpir sus reuniones, pudieron sesionar al día siguiente en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, gracias a la inmediata solidaridad de estudiantes y académicos de esa institución vecina.

Por otro lado, a pesar de la dispersión actual del CGH, la pervivencia de este movimiento ha traído varias consecuencias. Una primera es que las autoridades educativas federales y locales de otras instituciones evalúan con cautela cualquier intento de introducir reformas o iniciativas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la gratuidad, restricciones al ingreso y permanencia de estudiantes, Ceneval, decisiones autoritarias, represión. Hoy les es dolorosamente presente la posibilidad de un conflicto que se les vaya de las manos. Se ha continuado así la cautela generada durante la huelga y que se tradujo en la política de no provocar inquietud o inconformidad alguna que pudiera vincularse con el problema UNAM y establecer así una dinámica de ampliación del conflicto.³¹

Otra consecuencia es que los jóvenes universitarios de otras instituciones que estuvieron atentos al movimiento, hacen hoy un trabajo callado y anónimo de asimilación de las experiencias y demandas del movimiento de los estudiantes de la UNAM. Es en ese sentido, una lucha que se ha convertido en punto de referencia (sea para criticarla o apoyarla o ambas cosas) para muchos grupos estudiantiles del país que ven reflejadas en sus condiciones de estudio y vida el mismo acoso que hizo luchar a los estudiantes de extracción más popular de la UNAM.³²

Como ha ocurrido con otras muchas luchas en México que no ceden y son duramente golpeadas pero que no aceptan una disminución de sus demandas (el caso de Zapata es ejemplar en ese sentido) precisamente por eso se convierten luego en paradigmas que trascienden una situación concreta. Las raíces zapatistas modernas (Chiapas, 1994 en adelante) que han estado muy presentes en el movimiento universitario reiteran esa misma referencia.

Pero también, en tercer lugar, la situación presente está dando lugar a un curioso fenómeno de ampliación silenciosa del pliego petitorio del CGH que ha sufrido una revaloración importante en el contexto nacional.

Por una parte, han prácticamente desaparecido las iniciativas de aumento de colegiaturas en las instituciones públicas de educación superior. Por otra, los conflictos que aparecen por el acceso a la educación superior son tratados (como en el caso del estado de Michoacán) con gran cuidado y dando respuestas favorables a la demanda estudiantil.

Además, el conflicto ha hecho que el punto referente a los exámenes del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) -que sigue semi congelado en la UNAM- sea tratado con extremo cuidado. Un ejemplo es el caso del Instituto Politécnico Nacional cuyo Consejo General Consultivo a pesar de estar conformado mayoritariamente por autoridades, optó en mayo del 2000 por no aprobar la propuesta del Director en el sentido de hacer de estos exámenes el mecanismo oficial y único para el ingreso de estudiantes. En otras universidades estatales (Veracruz, Guerrero, Querétaro) el tema del Ceneval y sus exámenes se convirtió en objeto de debate y de encontradas posiciones o de plano, de rechazo (además de la UAM que se desvinculó en 1998, la Universidad Autónoma de Zacatecas lo hizo a principios de 1999).

Los nuevos términos de la disputa por la universidad pública

La situación cada día más evidente de tensión y disputa que vive la educación superior en México ha generado innumerables iniciativas de reflexión sobre cuál debe ser su futuro y su papel en una sociedad en transición del crecimiento hacia adentro al crecimiento en la globalización.

Sólo un ejemplo, en la UAM-Xochimilco, el máximo órgano de ese campus universitario, el Consejo Académico, encabezado por su rectora, decidió impulsar la celebración de una gran Convención Universitaria, una especie de Congreso Universitario, como el de la UNAM para proponer a al conjunto de todos los demás campus universitarios una reflexión sobre el rumbo que debía tomar en el futuro la universidad pública.

Estas y otras muchas iniciativas de estudiantes y trabajadores universitarios están logrando que de manera reflexiva y sistemática se comiencen a definir con mayor claridad los términos de la disputa por el futuro de la educación superior pública y con eso, que se comiencen a perfilar elementos para un proyecto de universidad pública surgido desde la vinculación de los universitarios con las realidades del país.

Así, por ejemplo, la disputa por la universidad aparece cada vez más claramente como dividida en dos grandes polos. Uno, el de la coalición de empresarios, organismos internacionales, gobiernos estatales y federales, rectores y autoridades educativas y personalidades académicas vinculadas a estos circuitos que consideran que la universidad

para el nuevo milenio debe ser parte del ciber-espacio, costosa, insertada en el mercado, excluyente y orientada a crear gerentes y técnicos y a ofrecer investigaciones de alto nivel para las empresas de punta con el propósito de volverlas internacionalmente competitivas. Su visión de universidad se alimenta de una concepción del desarrollo nacional que lo concibe a partir de un sector moderno, internacionalizado y competitivo, capaz de eventualmente generar una prosperidad que se distribuya a toda la población del país.

Por otro lado, hay una coalición implícita de movimientos de estudiantes, académicos, maestros de todos los niveles, organizaciones populares y un sector importante de la opinión pública que ve con creciente suspicacia y rechazo aquella vía de desarrollo neoliberal. La considera como ligada estructural y necesariamente a los procesos de creciente diferenciación en nuestras sociedades latinoamericanas, la degradación de las formas sociales, el despojo legalizado de la tierra, el atropello a derechos laborales y humanos elementales, la manipulación política y la subordinación a la economía norteamericana.

Considera también que la posibilidad de un futuro distinto, en México y en otros países, depende directamente de qué tanto los centros de estudios superiores públicos pueden contribuir a que las comunidades, barrios, colonias, organizaciones sociales y productivas, pueblos indígenas y sectores populares recuperen sus procesos de participación y democracia, el rescate a los saberes populares, la revitalizar de sus economías locales y su cultura. Es decir, que los centros educativos les ofrezcan, a través de los perfiles

profesionales de sus egresados, de las investigaciones y difusión, elementos capaces de sustentar y ampliar sus propios procesos de autoafirmación y sustento. En la medida en que en varios países estas mayorías puedan demandar e imponer su propia agenda social y económica será más fácil que junto con las mayorías de otros países, especialmente latinoamericanos, pueden obligar a que la mundialización de la economía se haga (como fueron los nacionales, el caso de México) con base, al menos, en un nuevo pacto sobre derechos sociales, económicos, culturales y humanos que constituya un avance y no un retroceso en la historia de la civilización humana.

Pero para jugar este papel estratégico, las universidades necesitan ser espacios abiertos especialmente a los jóvenes y adultos de los sectores mayoritarios, necesitan remover los obstáculos que representan las altas colegiaturas, los mecanismos selectivos de ingreso y los severos requisitos administrativos de permanencia. Necesitan también gozar de la autonomía necesaria para tener una visión independiente de los gobiernos y las grandes empresas, y necesitan de procesos internos democráticos para mantener la libertad de docencia, investigación y difusión. Necesitan, finalmente, de una reorientación general de sus objetos de estudio, del enfoque de sus disciplinas profesionales y de la investigación y difusión, a cargo de estudiantes y trabajadores universitarios, pero a partir de las necesidades, los procesos de reapropiación de las mayorías en sus regiones y localidades y a partir de las demandas concretas que estos tienen de conocimiento.

ALGUNOS DATOS SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO.

MATRICULA Y OTROS DATOS (1998)¹

Matrícula a nivel de licenciatura: 1.7 millones

Matrícula a nivel de posgrado: 107 mil

Indice de cobertura: 17%
(Población 18-24 años)

Deserción promedio en instituciones
de educación superior 50%

Matrícula en instituciones publicas: 1.0 millones
(no incluye normales)

Matrícula en instituciones privadas 355 mil
(no incluye normales)

**Comparación crecimiento instituciones públicas
y privadas (1985-1995):**

Publicas: 7.9% (72.1 miles)

Privadas: 56.9% (96.4 miles)

Matrícula UNAM 270 mil

Licenciatura² 135 mil aprox.

Bachillerato (nivel medio superior) 135 mil aprox.

Población total de México: 95 millones

**INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
(1994)³**

Publicas: 390 (total)

Universidades 39

Autónomas 34

Estatales 4

Universidad Pedagógica 1

Institutos Tecnológicos 110

Normales 215

Otras 25

Privadas 358 (total)

Universidades 49

Normales 111

Otras 198

PERSONAL DOCENTE EDUCACION SUPERIOR⁴

Personal docente (1998) 178 mil (total)

De tiempo completo y medio tiempo 66.0 mil

Por horas 111.9 mil

¹ La Educación Superior hacia el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. *Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 1999. Anexo Estadístico. Población Escolar.*

² Estos datos son estimaciones para 1995, la distribución entre nivel licenciatura y bachillerato para el total de 1998 (270 mil) puede variar ligeramente. Carlos Salinas de Gortari, Sexto Informe de Gobierno, 1994. Anexo Estadístico. Pág.361.

³ Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación. México. Educación Superior *Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 1997. Pág.117.*

⁴ ANUIES, Op.Cit.